



acceso 360



22/06/2020

# Resumen de prensa del IEF

Instituto de la  Empresa Familiar

REBOLD

Este boletín ha sido elaborado por REBOLD.  
Para cualquier información contacta con:  
[oscar.simon@letsrebold.com](mailto:oscar.simon@letsrebold.com) Tel 34 91 787 0000

## EMPRESA FAMILIAR

Fecha	Titular/Medio	Pág.	Docs.
21/06/20	"AYUDAR AHORA A LAS EMPRESAS ES LA VÍA MÁS EFICAZ PARA RECUPERAR CUANTO ANTES EL BIENESTAR" / La Nueva España	5	3
21/06/20	SUCESIONES E INTERÉS GENERAL / La Opinión El Correo de Zamora	8	1
22/06/20	LA EMPRESA FAMILIAR, OPUESTA A QUE SE SUSPENDA EL CESE DEL IMPUESTO DE SUCESIONES / El Correo de Zamora	9	1
22/06/20	HASTA 66 ASOCIACIONES CIVILIES PIDEN A SÁNCHEZ UN PACTO CONSTITUCIONALISTA / Superlunes	10	1
22/06/20	LA SOCIEDAD CIVIL URGE A UN PACTO DE "CONVIVENCIA Y RELANZAMIENTO ECONÓMICO" / Expansión	11	1

## FISCALIDAD

Fecha	Titular/Medio	Pág.	Docs.
22/06/20	ASÍ ES LA LLUVIA DE IMPUESTOS QUE VIENE DE BRUSELAS / Expansión	13	2

## ECONOMÍA

Fecha	Titular/Medio	Pág.	Docs.
22/06/20	ESPAÑA DESPIDE EL ESTADO DE ALARMA PERO LA ECONOMÍA SIGUE EN SITUACIÓN DE ALERTA / Cinco Días	16	1
22/06/20	ESPAÑA, EL PAÍS QUE MENOS AYUDAS FISCALES MOVILIZA PARA LAS EMPRESAS / Superlunes	17	1
22/06/20	EL GOBIERNO APARCA EL IMPUESTO A LA BANCA QUE IMPULSA PABLO IGLESIAS / Superlunes	18	1
22/06/20	DÍAZ: "LA EMPRESA TENDRÁ QUE PAGAR PARTE DE LA FACTURA DE TRABAJAR EN CASA" / Superlunes	19	1
22/06/20	LAS AEROLÍNEAS SE VEN ABOCADAS AL 'LOW COST' PARA SOBREVIVIR A LA CRISIS / El País	20	1
22/06/20	EL PACTO DE TOLEDO RETOMA HOY SU TRABAJO EN EL CONGRESO / El Periódico de Catalunya	21	1
22/06/20	DÍAZ CONFIRMA QUE LA EMPRESA ASUMIRÁ GASTOS DEL TELETRABAJO / Expansión	22	1

## ECONOMÍA

Fecha	Titular/Medio	Pág.	Docs.
22/06/20	LOS INVERSORES INMOBILIARIOS DEJAN UN TERCIO DE LAS COMPRAS POR LA COVID-19 / La Vanguardia	23	2



acceso 360

# EMPRESA FAMILIAR



JORGE SUÁREZ | Presidente de la Asociación Asturiana de Empresa Familiar (AEFAS)

## "Ayudar ahora a las empresas es la vía más eficaz para recuperar cuanto antes el bienestar"

"Tenemos que aprovechar los fondos que llegarán de Europa para eliminar las debilidades que nos hacen más vulnerables a las crisis"

**Oviedo, Pablo CASTAÑO**  
Jorge Suárez Díaz (Avilés, 1974), arquitecto, máster en Administración de Empresas y consejero delegado de la ingeniería Impulso preside desde hace un año la Asociación Asturiana de la Empresa Familiar (Aefas), que agrupa en la actualidad a 60 empresas con arraigo en la región (entre ellas destacadas compañías como Alsa, TSK, Lacera, Grupo Orejas, Masymas, El Gaitero, Mayador, Cafento, Toscaf...) que generan 19.000 puestos de trabajo y cuya facturación acumulada ronda los 3.000 millones, el 12% del PIB regional.

—¿Cómo ha encajado el parón económico por el coronavirus la empresa familiar asturiana?  
—Ha sido un parón muy duro. El 50% de las empresas llegaron a sufrir bajadas de actividad de hasta el 80%; la práctica totalidad tuvieron que adoptar, y siguen adoptando, medidas de restricción del gasto y ajuste de empleo, y ha habido rebajas de salarios. Es una crisis enorme. Lo peor, en términos de salud, ha pasado, pero a nivel económico queda mucha penuria aunque ahora estemos mejor.

—Pero una vez que se extingan medidas de contención como los ERTE, ¿la situación puede empeorar?  
—Creo que sí y eso preocupa especialmente a la empresa familiar.

—¿Por qué especialmente?

—Nos preocupa mucho la supervivencia de la empresa. Su longevidad y la transmisión del legado, y eso depende mucho de la situación macroeconómica del país. España tiene unas tasas de desempleo elevadas; un déficit inexplicable y permanente que nuestros gobernantes aceptan como normal, y un desequilibrio sectorial muy importante, con una economía muy terciarizada, y así cuando las cosas vienen feas, como es el caso, se sufre. Esos tres elementos configuran un escenario que nos preocupa mucho porque no sabemos qué va a ser de nuestros hijos si en el futuro asumen la empresa en un entorno de endeudamiento inmenso.

—¿Cómo valora las medidas de contención de la crisis aplicadas por el Gobierno?

—Los ERTE son una herramienta magnífica y han demostrado su funcionalidad. Todos los países de nuestro entorno tienen figuras similares. Si aceptamos que la economía sube y baja, como las mareas, y que eso escapa a nuestro control, es de sentido común dotarse de mecanismos que permitan flexibilizar costes laborales y que no se destruya empleo. Eso sería malo para el empleado y para el empleador porque nuestros costes de despido son de los mayores de Europa.

—¿Y hasta cuando deben durar



Jorge Suárez, en las oficinas de Impulso, en el Parque Tecnológico de Asturias, en Llanera. | Irma Collín

### los ERTE por fuerza mayor ligados al coronavirus?

—Se hicieron para ayudar a las empresas por la caída de la demanda, por lo tanto parece lógico que tengan que durar hasta que las empresas sean sostenibles, poniéndole un límite de 6, 8 o 10 meses, porque si la empresa no recupera quizá es que es inviable. Cortar los ERTE no parece lógico y esperemos que se llegue a un acuerdo que evite destrucción del empleo.

### —¿Los avales del ICO están dando oxígeno a las empresas?

—Conceptualmente es una buena medida para que las empresas se financien, pero se está aplicando con lentitud y es insuficiente lo aprobado. Con los avales el Gobierno no pone un duro, por lo que sería bueno que los complementasen con otras medidas.

### —¿Cuáles?

—Ayudas directas. En 2017 España ayudó a sus empresas por valor de 3.000 millones y Alemania por importe de 42.000. Esto da idea clara de la orientación de las políticas en los distintos estados de la UE. Hay países que tienen clara la secuencia para crear bienestar. Primero empresas, segundo empleo, tercero impuestos y cuarto bienestar. Se necesita mucho dinero para crear bienestar.

—Pero será difícil obtenerlo si se bajan o eliminan impuestos como piden los empresarios.

—Los gobernantes que tenemos entienden que la forma de cubrir los gastos es subir los impuestos, lo cual carece de sentido. Lo razonable, primero, sería valorar si es posible reducir el gasto público, que yo creo que sí porque sólo en Asturias hay 52 empresas públicas. Pero para cubrir un nivel de gasto mayor lo que tienes que hacer es poner los medios para que tu economía se haga más grande, no a una economía pequeña

“

Cortar los ERTE no es lógico, deben durar hasta que la empresa vuelva a ser sostenible

Ingreso mínimo vital, sí, pero vinculado a la formación y a buscar un trabajo

freír a impuestos. Gravar no conduce necesariamente a ingresos.

### —Explíquese.

—En un contexto de desempleo creciente la subida del IRPF no conduce a mayores ingresos. En un contexto en el que en los últimos tres meses se han cerrado 130.000 negocios, la subida del impuesto de sociedades tampoco da mayores ingresos, además de que su contribución es marginal. El grueso está en el IVA y el IRPF y ambos están ligados a la existencia de empleo. Si generamos más empleo se recauda más IRPF. Y a su vez el IVA está relacionado con el consumo y este con los salarios y por tanto también con el empleo. La demanda interna se activa generando trabajo y este se crea apoyando a las empresas, haciendo que haya más y que las que tenemos sean más grandes. Sin crecimiento económico no hay empleo y sin él no hay ingresos tributarios y sin ellos no existen sistemas de protección social, y la sanidad y la educación cada vez serán peores. El empleo lo crean las empresas y es hora de olvidarse de ideologías y de dogmas y de aplicar

ortodoxia y sentido común. En España no se apoya a las empresas, ni siquiera forma parte del discurso de nuestros políticos. Apoyarlas ahora sería la vía más eficaz de recuperar cuanto antes bienestar.

—El Gobierno acaba de aprobar un plan de apoyo a las empresas del automóvil.

—No está pensado desde una óptica de impulso real al sector del automóvil, está pensado desde una óptica cosmética para intentar demostrar que el Gobierno hace cosas.

### —¿A qué se refiere?

—De los 3.750 millones de dotación que hay en el plan, 2.200 pertenecen al plan "Reindus" que lleva funcionando 25 años y que es para todas las industrias del país, no sólo para la del automóvil.

—¿El ingreso mínimo vital es necesario?

—En un país como España a nadie le puede faltar para comer. Estoy a favor de un ingreso mínimo. Pocos estarán en contra de él como concepto. El debate está en la duración y si debe estar vinculado a algún tipo de incentivo que haga que la gente salga de ese umbral. Ingreso mínimo vital sí, pero vinculado a una formación y a la búsqueda de trabajo.

—¿Qué ha echado en falta entre las medidas aprobadas por el Gobierno para amortiguar esta crisis?

—Por ejemplo, no puedo comprender que no se haga nada en el sistema público educativo para acabar con la brecha digital o que no haya aún un plan de salida de esta crisis. España va a acceder a un montón de fondos europeos. Podrían ser unos 170.000 millones. ¿Qué plan tenemos para ese dinero? ¿Alguien ha pensado a nivel regional y a nivel nacional que es lo que hay que hacer con él?

Pasa a la página siguiente



# “No hay apuesta por la industria, el resultado es Alcoa o Nissan”

“Yo he traído proyectos al Principado y acabaron en Galicia porque allí aportaban mucha mayor ayuda pública a la inversión”

**Viene de la página anterior**

**—¿Usted lo ha pensado?**

—Lo que hay que hacer es utilizar esos fondos para corregir los desequilibrios de nuestra economía de tal manera que en el futuro, cuando venga otra crisis, que vendrá, estamos mucho mejor preparados de lo que estamos hoy y no haya tanta destrucción de empleo y no haya tanta necesidad de recurrir a deuda y a subvenciones.

**—¿Y eso cómo se logra?**

—Pasa por un consenso entre partidos políticos y con los agentes sociales. Necesitamos un plan para transformar la economía española en una economía sostenible. Vamos a Europa a pedir dinero pero no existe un programa económico. ¿Por qué 170.000 millones?. ¿Alguien ha cifrado cuánto dinero necesitamos para invertir en renovables, en biotecnología o en industria?. No existe, y esto es crucial para Asturias, ni una política industrial nacional ni regional para corregir la alta terciarización de la economía. Lo estamos viendo con el plan “Reindus”, que se lo quieren cargar

fixando techos de ayudas de 800.000 euros que no dan ni para cacahuetes. No se apuesta por la industria y las consecuencias son Alcoa, Vesuvius, Nissan y otras tantas que vendrán detrás. Asturias, que es un territorio esencialmente industrial, tiene la condición perfecta para apostar por una industria verde, que fabrique sin contaminar, pero no hay una determinación clara.

**—Sobre la mesa del Principado hay una “Propuesta para el relanzamiento de la economía asturiana” que ha elaborado el catedrático Joaquín Lorences que incluye medidas como triplicar el capital de la sociedad de garantías Asturgar, relanzar la ZALIA, duplicar el gasto en I+D+i, apostar por una oferta turística cultural, crear una oficina de proyectos europeos...**

—En Asturias tenemos cosas que funcionan bien y Asturgar es una de ellas. Estoy de acuerdo en que debería tener más ambición. Con respecto a las otras propuestas todo en el papel pinta bien, pero el problema de Asturias no es de ideas. Hay mucha gente con muchas ideas, pe-

ro se falla en la implementación.

**—¿Qué hay que hacer?**

—Hace falta ponerse las botas, bajar a la arena y hacer que aterricen esas ideas. Nadie puede decir que es malo reactivar la ZALIA, pero hay que explicar con qué presupuesto y con qué acciones concretas. Hay que desarrollar el turismo cultural. Suena muy bonito. ¿Pero exactamente qué se va a hacer y cuánto se va a invertir?. Yo he traído proyectos privados a la administración regional y desgraciadamente acabaron en Galicia porque la posibilidad de la Xunta de aportar fondos públicos para apoyar esas inversiones era muy superior a la de Asturias.

**—¿Hay mucha competencia?**

—Las empresas seleccionan sus emplazamientos en función de las bondades que se les ofrecen. Un ejemplo de esto es la ZALIA. Su suelo, que no tiene accesos, ni gas, ni luz, llegó a valer 180 euros el metro cuadrado, ahora ronda los 100 y así es imposible que alguien se instale y a la vista está. El suelo en Benavente cuesta 11 euros y hacia allí se han ido empresas asturianas. El suelo les cuesta diez veces



Jorge Suárez. | Irma Collin

**“En Asturias tenemos suelo industrial, pero no es competitivo y eso es peor que no tenerlo”**

menos y están a una hora de aquí. No se debería desarrollar suelo en Asturias que obligue a comercializaciones por encima de 50 euros el metro cuadrado. Es un problema de

planificación, de política industrial, que nos falta. En Asturias hay suelo, pero no es competitivo, que es peor que no tenerlo.

**—El plan de Lorences apuesta por pasar a la ofensiva y no quedarse sólo en las políticas defensivas.**

—Todos tenemos que pelear por Asturias. En la responsabilidad social corporativa de las empresas debería incluirse el pensar en asturiano. Tenemos en la región muy buenas empresas y muy buenos profesionales y los empresarios asturianos podemos comprar aquí muchas cosas que adquirimos fuera, a veces por desconocimiento o por falsas creencias. Eso los hacen vascos y gallegos. No todo es pedir a las administraciones.

**—Pero cuando Lorences se refiere a pasar a la ofensiva se refiere a poner más energía en lo emergente, en lo nuevo, que en el mantenimiento de lo declinante.**

—Hay que apostar por lo nuevo, claro, acompañando el cierre de lo obsoleto. Pero lo que funciona no hay que tocarlo, en todo caso impulsarlo. Y si, por ejemplo, la industria siderúrgica asturiana no es competitiva habrá que hacer algo, lo que no podemos es dejar que pase el tiempo sin ninguna perspectiva de solución. Hay que entender el problema. ¿Está sólo en el coste de la electricidad?. ¿Con el precio de otros países es competitiva? No creo que dependa sólo de una variable. También dependerá de la eficiencia de máquinas y procedimientos.

**–Un precio alto de la energía desincentiva invertir en mejoras.**

–Como país no nos podemos permitir el lujo de tener la energía más cara que nuestros principales competidores.

**–¿Asturias saldrá de esta nueva crisis más tarde que otras regiones cómo en las anteriores?**

–Eso no lo sabe nadie. Más que jugar a adivinar qué va a suceder lo que tenemos que hacer son los deberes. Tenemos que aprovechar los fondos que nos van a llegar para eliminar las debilidades de nuestra estructura económica y entonces seremos menos vulnerables a las crisis, más resistentes.

**–¿Y cuáles son las principales debilidades?**

–Una de las principales es la terciarización de la economía. Debemos apostar por la industria, necesitamos más fábricas transformadoras porque tenemos mucha industria de cabecera, que está muy arriba en la cadena de valor y es muy agresiva, con mucho volumen y poco valor añadido, pero nos falta posicionarnos aguas abajo para añadir valor al acero, al aluminio, al zinc o al vidrio. También debemos apostar por la descarbonización porque por ahí van todos los tiros.

**–¿De esta crisis del covid se puede sacar algo en positivo?**

–Ha quedado demostrado que la dependencia excesiva en determinados productos de industrias externas no es buena y eso es una lección positiva porque induce a pensar que hay que desarrollar más industria en nuestro territorio y no comprar tanto fuera.



## Sucesiones e interés general

Carta abierta a los firmantes del Pacto para la Recuperación Económica de Castilla y León

### Junta directiva de la Empresa Familiar de Castilla y León

El miércoles pasado una amplísima mayoría del arco parlamentario de las Cortes de Castilla y León formada por el PP y Ciudadanos, los partidos que gobiernan, y por el PSOE, Podemos y Por Avila, firmó el Pacto para la Recuperación Económica de Castilla y León. El acuerdo, que recoge 86 puntos, contempla la aportación de 1.104 millones de euros para articular medidas de aplicación inmediata en los ámbitos de la Sanidad, Educación, Servicios Sociales y Agricultura. Las Corporaciones Locales también se beneficiarán, al igual que el Plan de Infraestructuras 2021-2025, un plan que ya se había desplegado en anteriores legislaturas.

La plasmación de este logro ha vuelto a poner de manifiesto que Castilla y León es una tierra de encuentro y diálogo donde, como en tantas veces en la historia reciente de nuestra Comunidad, nuestros dirigentes han demostrado altura de miras y generosidad para -desde sus diferencias- construir, sumar y avanzar juntos; una realidad que desde la Empresa Familiar siempre hemos reconocido y valorado. Ese Pacto es, sin lugar a dudas, un éxito colectivo que sitúa a las personas por encima de las siglas políticas. Sin embargo, por coherencia y responsabilidad, bajo esa pátina del interés general no se puede ocultar que determinadas cesiones son objetivamente obstáculos y frenos que, avalados por cifras, complican todavía más el contexto económico y empresarial de Castilla y León.

En concreto, el apartado número 84 del acuerdo declara la "suspensión del trámite del Proyecto de Ley para la práctica eliminación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones para familiares directos". Esta decisión impacta directamente en los intereses de muchas familias castellanas y leonesas que, en la situación actual de crisis y de pérdida de valor de los activos, se verán obligados a plantearse renunciar a su herencia, lo que en muchos casos dificultará la continuidad de la actividad económica familiar si no existe liquidez para el pago del impuesto.

A esto hay que unir el hecho de que el tratamiento desigual entre comunidades autónomas es absolutamente incontestable. El impuesto existe en ocho comunidades, donde prácticamente está eliminado y, según un estudio reciente totalmente imparcial elaborado por el Consejo General de Economistas, Castilla y León es la segunda autonomía que peor trata a sus conciudadanos cuando mueren.

La Covid-19 ha sido inexorable y ha provocado que la sociedad, la familia, los políticos y las empresas nos hayamos tenido que adaptar a esta mal denominada "nueva normalidad".

Pero tan cierto como eso es que, si esta pandemia no hubiese pasado por nuestras vidas, esta Ley ya estaría aprobada por las Cortes de Castilla y León y habría entrado en vigor. Por lo que, lejos de demagogias, nos preguntamos: ¿Dónde queda la seguridad jurídica? ¿Cómo impacta esa falta de seguridad en la economía? ¿Dónde quedan los compromisos de nuestros dirigentes? ¿Dónde van a parar los programas electorales? Sin palabra se quiebra la confianza.

Asumimos que este es un debate complejo y que, en términos de imagen pública, a los empresarios siempre se nos ha colgado el 'sambenito' de "ellos pelean por su dinero". Más allá de las etiquetas, más allá del anacronismo, lo que a nadie le puede pasar desapercibido es que la generación de riqueza y de empleo está en el centro del núcleo de ese interés general sobre el que se sostiene este Pacto. Y sí, el no cumplimiento de un compromiso como el adquirido para suprimir el impuesto de Donaciones y Sucesiones impacta sobre el empleo.

En términos económicos, este punto significa poner en riesgo la continuidad de la actividad económica. El 95% de las empresas de nuestra Comunidad son pymes y aportan el 80% del empleo privado. La medida solo supone el 0,35% del total de ingresos vía tributos. Pero tendrá consecuencias económicas.

En primer lugar, porque habrá familias de fallecidos que tengan problemas de liquidez para pagar el impuesto por la disminución del valor de los activos en los últimos 3 meses y, en segundo lugar, por el perjuicio que pueda suponer para las inversiones futuras. Cuando el criterio era el de eliminarlo, se argumentaba que así se facilitaría el "movimiento de la economía"... Los notarios avisan: "Se producirán renunciaciones a las herencias".

Es por todo ello que este anuncio supone un durísimo golpe al compromiso de muchos de nosotros con nuestra tierra como, una vez más, hemos demostrado dando la cara durante esta pandemia de manera perseverante y silenciosa.

No es de recibo que el afán recaudatorio no deje descansar ni a los fallecidos por el COVID. Mientras de forma arbitraria se aparcan decisiones de este calado, gran parte de nuestros impuestos no se destinan al bienestar de los ciudadanos sino, como ya hemos denunciado en otras ocasiones, a mantener un sistema administrativo y político ineficiente y exageradamente costoso.

Reconocemos las bondades de este Pacto, aplaudimos el diálogo y el acuerdo, pero permítannos no compartir con argumentos objetivos y contrastables la toma de esta decisión bajo el paraguas del interés general, para justificar la adopción de determinados acuerdos con serios efectos perniciosos para las familias empresarias de Castilla y León y la generación de empleo.





## La empresa familiar, opuesta a que se suspenda el cese del impuesto de sucesiones

EFCyL advierte que supone un obstáculo e impactará sobre el empleo en la comunidad

### Valladolid, Ical

La Junta Directiva de Empresa Familiar de Castilla y León advirtió ayer de que el anuncio de paralización de la eliminación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones contenida en el Pacto para la Recuperación Económica, “supone un durísimo golpe al compromiso de muchos de nosotros con nuestra tierra”.

Los empresarios familiares afirman, en una carta abierta, que

“no es de recibo que el afán recaudatorio no deje descansar ni a los fallecidos por el COVID”. EFCyL reconoce las bondades del pacto pero rechaza la adopción de “determinados acuerdos con serios efectos perniciosos para las familias empresarias de Castilla y León y la generación de empleo”. “Son objetivamente obstáculos y frenos que complican todavía más el contexto económico y empresarial”.



# Hasta 66 asociaciones civiles piden a Sánchez un pacto constitucionalista

Firman un manifiesto para que PP y PSOE alcancen un acuerdo de convivencia

Á. S. MADRID.

Hasta 66 asociaciones civiles de toda España han firmado un manifiesto para pedirle al Gobierno de Pedro Sánchez que se aleje de los partidos independentistas y los populismos para reconstruir el país tras la pandemia del coronavirus. Los firmantes, entre los que se encuentran Abogados Catalanes por la Constitución, la Cámara de Comercio de EEUU en España, las asociaciones para la empresa familiar andaluza, gallega, cántabra, asturiana, castellano leonesa, manchega o alicantina; la Cámara de Comercio de Gijón, Empresaris de Catalunya, Alternativa Ciudadana Progresista, Sociedad Civil Ahora, Fundación Sociedad Civil, Sociedad Civil de Valencia, el grupo de Periodistas pi i Maragall o los Historiadors de Catalunya, solicitan que las dos principales fuerzas políticas (PP y PSOE) alcancen un acuerdo de convivencia y de "relanzamiento social" que "refuerce nuestro sistema democrático y posibilite la recuperación".

"Las tensiones separatistas y la crisis de la organización territorial del Estado ya hacían del acuerdo



Pedro Sánchez, presidente del Gobierno. EE

entre fuerzas políticas constitucionalistas una necesidad imperiosa. La coincidencia de las crisis sanitaria, económica, social y territorial lo hace ahora inexcusable", recoge el manifiesto que también firman el Círculo de Empresarios, el Club

Tocqueville, la Confederación Española de Organizaciones de Mayores o el Consejo Empresarial Alianza para Iberoamérica.

"Queremos recuperar el espíritu de consenso que se vivió en la Transición. Apelamos por ello al Gobier-

no de España para que busque acuerdos de Estado con los demás partidos defensores de la Constitución, que pueden y deben ser parte de la solución. La búsqueda de acuerdos debe traducirse en hechos tangibles, desde un genuino espíritu de colaboración que sustituya al actual de confrontación. La mayoría de los ciudadanos quiere políticas que se alejen de los extremos", concluyen los firmantes.

Mientras, Sánchez mantiene como interlocutor preferente a ERC,

**El presidente insta a la renovación de la economía hacia la sostenibilidad y la digitalización**

que prima la independencia de Cataluña sobre la recuperación de todo el país, y en su última comparecencia del estado de alarma instó a la renovación de la economía española hacia la sostenibilidad y la digitalización.



Pr: Diaria  
Tirada: 28.818  
Dif: 19.343

# La sociedad civil urge a un pacto de “convivencia y relanzamiento económico”

**LLAMAMIENTO/** Un manifiesto promovido por la Fundación Joan Boscà, firmado por casi 70 entidades civiles, pide a los partidos constitucionalistas que recuperen el “espíritu de consenso” de la Transición.

J. Díaz. Madrid  
Empresarios, economistas, intelectuales... cada vez son más los colectivos que reclaman a las fuerzas políticas consenso para superar la grave emergencia económica y social que ha provocado el coronavirus en España. Este fin de semana se han unido a este creciente clamor cerca de 70 entidades de la sociedad civil, que han suscrito un manifiesto impulsado por la Fundación Joan Boscà en el que instan a los partidos constitucionalistas “a que se comprometan en un acuerdo de convivencia y de relanzamiento económico y social que refuerce nuestro sistema democrático y posibilite la recuperación económica”.

Un nutrido y muy representativo coro de voces en el que figuran el Círculo de Empresarios, la Cámara de Comercio de EEUU en España (AmCham Spain), la Asociación Nacional Sociedad Civil Ahora, numerosas asociaciones regionales de la empresa familiar, cámaras de comercio y diferentes círculos empresariales. “La fuerza de este manifiesto no reside solo en su contenido, sino en el hecho de que mucha gente que no tiene por vocación manifestarse sobre este tipo de cues-

tiones ahora ha sentido la necesidad de hacerlo”, señala a EXPANSIÓN Joaquín Güell, presidente de la Fundación Joan Boscà, promotora de una iniciativa que ayer seguía sumando adhesiones.

El manifiesto subraya que España vive una situación excepcional, en la que los problemas que ya arrastraba, con especial énfasis en “las tensiones separatistas y la crisis de la organización territorial del Estado”, se han visto seriamente agravados por la crisis sanitaria, económica y social que ha generado el Covid-19, lo que, a juicio de las entidades firmantes, hace que el acuerdo entre los partidos constitucionalistas, que ya antes era una “necesidad imperiosa”, sea ahora “inexcusable”. El manifiesto apela a “recuperar el espíritu de consenso que se vivió en la Transición y que abrió paso a la etapa de mayor libertad y prosperidad de la historia de España”. Un espíritu que los firmantes del documento consideran hoy más necesario que nunca porque “una sociedad en crisis y alejada de las instituciones es un peligroso caldo de cultivo para populistas y extremistas de todo tipo”. La palabra clave es diálogo, frente al actual clima de



Panorámica del Congreso, que el pasado 17 de junio celebró el último pleno en estado de alarma.

crispación y confrontación, pero también moderación. “Lo que les pedimos a las fuerzas políticas es que se muevan en un marco de moderación, con una política económica centrada y razonable”, señala Güell.

## Nueva etapa

La iniciativa de la Fundación Joan Boscà ha coincidido en el tiempo con la macrocumbré organizada por CEOE pa-

ra reivindicar el papel que los empresarios deben jugar en el proceso de reconstrucción de la economía, una iniciativa sin precedentes con la que el mundo de la empresa se ha dado voz a sí mismo ante un Gobierno que optó por darle la espalda durante buena parte de la gestión de la crisis. El evento, que desde el pasado día 10 de junio congrega a los primeros espaldas de las grandes compañías españolas, se-

rá clausurado por el Rey, Felipe VI, el próximo jueves, día 25.

España dejó ayer atrás casi cien días de estado de alarma e inició la *nueva normalidad* con la que se adentra en terreno desconocido, bajo el miedo al rebrote del Covid-19 y con muchas más dudas que certezas sobre el futuro de la economía y del país. Pese al clamor de la sociedad civil, el país arranca esta nueva etapa sin

**Joaquín Güell:**  
“Pedimos una política económica centrada y razonable”

“Mucha gente que no tiene vocación de manifestarse ha sentido ahora la necesidad de hacerlo”

que se vislumbren posibles pactos de Estado para la reconstrucción y con el futuro de los ERTE en el aire, toda vez que la actual prórroga expira a finales de mes. En este sentido, Gobierno y agentes sociales volverán sentarse hoy en la mesa de negociación para intentar sellar una nueva prórroga hasta septiembre. El principal escollo es que el Ejecutivo plantea exenciones en las cuotas a la Seguridad Social para los ERTE por causas objetivas mientras que empresarios y sindicatos reclaman que dichas exenciones se destinen a los que permanecen en ERTE y no a quienes se reincorporan al puesto de trabajo.

En una nueva semana que promete ser muy intensa, el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, participará mañana en la Comisión de Reconstrucción del Congreso. La institución que gobierna vaticina que el PIB podría caer más de un 15% este año, con un déficit de entre el 9,5% y el 11,2% y un endeudamiento público de hasta el 120%.

**Opinión / Tom Burns** El despertar empresarial / Página 39



acceso 360

# FISCALIDAD



Pr: Diaria  
Tirada: 28.818  
Dif: 19.343

# Así es la lluvia de impuestos que viene

**'PLAN MARSHALL'** / La Comisión quiere que el presupuesto comunitario juegue un papel crucial en el plan de reconstrucción de la sus recursos propios para ayudar a financiar los nuevos instrumentos. Planea un abanico de impuestos que afectarán

J.Díaz. Madrid

Europa ya resurgió una vez de sus cenizas tras la Segunda Guerra Mundial. Hoy necesita reconstruirse de nuevo ante el efecto devastador del coronavirus. Ante la magnitud de la catástrofe, la respuesta del bloque comunitario ha sido poner encima de la mesa un histórico plan de recuperación que entre el bazuca del BCE, que suma 1,35 billones de euros hasta la fecha, y las distintas iniciativas de Bruselas (los fondos de recuperación y de rescate, el programa de ayuda para los ERTE y los préstamos del BEI, que aglutinan en conjunto 1,29 billones) alcanza una cifra sin parangón: más de 2,6 billones de euros. Un esfuerzo titánico al que, si se añade el presupuesto comunitario para el periodo 2021-2027, que Bruselas quiere reforzar hasta los 1,1 billones de euros, eleva la potencia de fuego europea por encima de los 3,7 billones.

Però toda moneda tiene dos caras y el reverso de este ingente esfuerzo para renacer de entre los escombros del Covid-19, propuesta a la que se ha llegado no sin dificultades y que aún debe superar el filtro de unos socios divididos y en muchos casos reacios a que parte de las ayudas sean transferencias y no créditos, como evidenció la cumbre virtual de líderes europeos celebrada el pasado viernes, son unas necesidades de financiación también sin precedentes.

El grueso se financiará mediante la emisión de deuda a largo plazo (por primera vez en la historia de la UE, se emitirán títulos supranacionales), pero como señaló recientemente la presidenta del BCE, Christine Lagarde, el presupuesto comunitario deberá jugar también un "papel crucial" para movilizar los recursos necesarios. Unos recursos que Bruselas no buscará debajo de las piedras, sino en parte en el bolsillo de las empresas europeas y, por extensión, de los ciudadanos de la UE, en los que de un modo u otro repercutirá la batería de impuestos que proyecta el Ejecutivo comunitario. Una andanada fiscal con la que la Comisión Europea pretende cosechar nuevos recursos propios con los que "ayudar a financiar" el fondo de recuperación poscoronavirus, tanto

en lo que se refiere al reembolso de la deuda, la primera mutualizada de la UE, como al pago de intereses.

Von der Leyen, que llegó a la presidencia de la Comisión Europea con unos apoyos muy ajustados y que ha reivindicado su mandato asumiendo un rol muy activo en la respuesta a la crisis del Covid-19, ha revestido con un barniz verde y solidario su propósito de flexibilizar el margen de maniobra de un presupuesto comunitario hasta ahora muy encorsetado para hacerlo más asimilable para los Estados miembros. De hecho, buena parte de las figuras impositivas planteadas hasta la fecha están vinculadas a la obtención de unos "recursos propios verdes" que, además de contribuir al "esfuerzo de recuperación", apoyen "la transición verde de la economía y la sociedad europeas". Esta es la lluvia fiscal que prepara Bruselas:

## Ampliación del comercio de emisiones

Los Estados de la UE ingresaron unos 13.600 millones de euros en 2018 por la subasta de los derechos de emisión de CO<sub>2</sub>, 8.000 millones más que el año anterior como consecuencia del alza del precio del carbono. El Ejecutivo comunitario ha puesto encima de la mesa modificaciones importantes en el sistema de comercio de emisiones. Plantea que los países del bloque mantengan ingresos similares a los que ya obtienen por este concepto pero fijando un techo a partir del cual los recursos excedentes vayan a parar a las arcas del presupuesto de la UE. En concreto, sopesa extender este sistema, que en la actualidad afecta esencialmente a las áreas industriales y de generación eléctrica, a los sectores marítimo y aéreo. Según los cálculos de Bruselas, esta medida podría reportar unos ingresos de alrededor de 10.000 millones de euros al presupuesto comunitario, dependiendo del precio del carbono y de su introducción en nuevos sectores de actividad.

## Impuesto al carbono en frontera

Otra de las medidas que contempla Bruselas es imponer



La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

## El hachazo nacional

Las empresas y ciudadanos españoles se enfrentarán en muchos casos a un doble mordisco fiscal, ya que a las medidas que proyecta Bruselas se sumará el hachazo impositivo que prepara el Ejecutivo de Pedro Sánchez, que no renuncia a su hoja de ruta hacia la convergencia fiscal con Europa; es decir, a una subida generalizada y masiva de impuestos "en el momento adecuado", tal como señaló no hace mucho

la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Así, junto al rodillo tributario que avanza desde Bruselas, sobre el contribuyente nacional sobrevuelan muchas otras alzas impositivas: en IRPF, Sociedades; Patrimonio, con especial énfasis en las grandes fortunas, en el diésel... Sin olvidar otras figuras de nuevo cuño, como el gravamen al plástico o las denominadas tasas Tobin y Google, aunque el futuro de

esta última está en el alero en nuestro país y no solo por las amenazas de EEUU, sino porque se solapa con la intención de la Comisión Europea de homogeneizar este impuesto en la UE y utilizar sus ingresos para nutrir el presupuesto comunitario. En conjunto, la batería fiscal que planea el Gobierno rondaría los 7.600 millones de euros. Alrededor de 2.600 millones provendrían de la Ley contra el Fraude y

las tasas Tobin y Google (aunque los casi 1.000 millones de ésta se encuentran seriamente en entredicho). De los 5.000 millones restantes, el grueso de la recaudación provendría de Sociedades, con unos ingresos estimados de 3.826 millones. La subida del diésel para equiparar su fiscalidad a la de la gasolina aportaría otros 670 millones y el alza del IRPF a las rentas altas, 328 millones más.

tasas contra importaciones de productos de países terceros que impliquen generación de carbono, una medida que impactaría de lleno en los productos chinos, pero no solo en ellos: también en los procedentes de países emergentes como Marruecos e India.

El propósito de la Comisión, además de nutrir sus cuentas, es garantizar que las compañías europeas compiten en igualdad de condiciones con empresas extraco-

munitarias de países con estándares medioambientales mucho menos exigentes. Una medida que la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, lleva meses defendiendo en Bruselas y una vieja reivindicación de sectores como el siderúrgico, que se quejan del coste que supone competir con importaciones procedentes de terceros países donde los fabricantes no cumplen las mismas obligaciones y, por ende, no asumen el coste que

representa. Con este canon, la Comisión estima que se podrían recaudar entre 5.000 y 14.000 millones de euros, una amplia horquilla que, según reconoce el propio Ejecutivo comunitario, dependerá del diseño de la tasa y, sobre todo, de su ambición.

## Gravamen a los envases de plástico

También bajo el paraguas de la lucha contra el cambio cli-

mático, Bruselas evalúa imponer una tasa a los envases de plástico no reciclables, que han ganado protagonismo entre los consumidores durante las semanas de confinamiento. Aunque Bruselas no ha precisado ahora los cálculos sobre lo que recaudaría con esta medida, es una posibilidad que contempla desde 2018, cuando presentó su primera propuesta para el nuevo marco financiero plurianual para 2021-2027. Entonces, es-



Pr: Diaria  
Tirada: 28.818  
Dif: 19.343

# de Bruselas

economía. Para ello, necesita reforzar esencialmente a la actividad empresarial.

## El Ejecutivo comunitario planea nuevos tributos para recaudar unos 42.000 millones

timó los ingresos por esta nueva tasa en unos 7.000 millones de euros anuales. La iniciativa de la UE discurre en paralelo con los planes del Gobierno de Pedro Sánchez de fijar un impuesto sobre los productos de plástico de usar y tirar, como cubiertos y pajitas, a partir de julio de 2021, al tiempo que, desde 2023, prevé vetar la entrega gratuita de vasos y recipientes para alimentos.

### Impuesto a las grandes empresas

Aunque la mayoría de impuestos que proyecta Bruselas tienen un pretexto medioambiental, sus necesidades recaudatorias van más allá. Europa no ha dudado en acudir al rescate de sus empresas en apuros con ingentes medidas de liquidez, moratorias en el pago de impuestos e incluso abriendo la puerta a recapitalizaciones masivas con dinero público, pero también exigirá sacrificios a sus compañías más grandes.

El Ejecutivo que preside Ursula von der Leyen planea una suerte de tarifa de acceso al mercado único para compañías con una facturación superior a 750 millones. Con esta medida, que entraría en vigor y afectaría a unas 70.000 compañías, de ellas unas 200 españolas, la Comisión aspira a recaudar al menos 10.000 millones anuales. La premisa es que las empresas que obtienen "grandes beneficios" del mercado único y que, en algunos casos, sobrevivirán a la crisis gracias al apoyo directo o indirecto de la UE y de sus Estados deben contribuir a su reconstrucción.

### 'Tasa Google'

La imposición de un canon a los gigantes digitales, la denominada *tasa Google*, es un proyecto largamente postergado en la UE por la falta de acuerdo. Ahora, Bruselas aspira a ingresar unos 1.300 millones de euros con este tributo, que en principio quería enmarcar dentro de un acuerdo global

en la OCDE, que, sin embargo, se aleja por la actitud beligerante de EEUU, que la semana pasada se levantó de la mesa de negociación y amenaza con posibles represalias contra los países que parecen determinados a aplicarla, entre ellos España. La Comisión está dispuesta a seguir adelante aun sin acuerdo en la OCDE, pero con una propuesta mucho menos ambiciosa que años atrás, cuando calculaba unos ingresos de 5.000 millones. El planteamiento de Bruselas choca de plano con los planes del Gobierno de Sánchez, que pretendía ingresar cerca de 1.000 millones con su propia *tasa Google*, casi tanto como en el conjunto de la UE, un impuesto que el Ejecutivo comunitario quiere que sea homogéneo en el bloque y cuyos ingresos vayan a parar a las arcas de la Comisión.

### Vencer reticencias

Con esta ofensiva fiscal, el Ejecutivo que lidera Ursula von der Leyen quiere recaudar al menos 42.000 millones anuales con los que engordar el presupuesto comunitario, pero también pretende hacer más digerible su *Plan Marshall* para los países que como Holanda, Austria, Suecia y Dinamarca, el llamado *club de los frugales*, se muestran reticentes a elevar sus aportaciones y, sobre todo, a conceder parte de los recursos como subvenciones a fondo perdido en lugar de préstamos. "Soy una gran defensora de la colaboración europea, pero también soy del norte de Jutlandia. Defiendo que uno tiene que pagar la deuda que ha contraído", afirmó recientemente la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, quien al menos anticipó que entre sus planes no está vetar las negociaciones sobre el fondo de recuperación.

Y es que un solo país podría bloquear la iniciativa, truncando así las esperanzas de España, uno de los grandes beneficiarios del plan de Von der Leyen, del que, si logra cristalizar, le corresponderían unos 140.000 millones, algo más de 77.000 millones en subvenciones y los 63.000 millones restantes en forma de préstamos, cifra equivalente al 11% del PIB español.



acceso 360

# ECONOMÍA



La nueva normalidad La crisis del Covid-19

# España despide el estado de alarma pero la economía sigue en situación de alerta

Llevará años volver al nivel previo a los 100 días de confinamiento

El consumo y el turismo seguirán débiles y hay riesgo de rebrote del virus

JUANDE PORTILLO  
MADRID

España abandonó ayer el estado de alarma decretado el 14 de marzo tras 100 días sumida en las inéditas medidas de confinamiento y restricción de la actividad impulsadas para tratar de contener la pandemia del coronavirus Covid-19. Una suerte de letargo económico y social del que el país despierta en condiciones muy diferentes a las que entró. Tras unas semanas de descompresión, en el marco del plan de desescalada de esta excepcionalidad, los ciudadanos pasan ahora a vivir en la llamada "nueva normalidad", que regirá hasta que haya cura para el virus, libres ya de restricciones de movilidad y sujetos solo a las prevenciones que impulse cada autonomía. Sin embargo, tras arrancar el año con un crecimiento que perdía velocidad y sufrir en estos meses la caída más vertical de su historia, la economía española proseguirá ahora inmersa en su propio estado de alarma particular, uno que costará años desescalar.

"Ahora tenemos la certeza de que poner a hibernar la economía cuesta muy poco, se puede hacer por decreto, es como bajar un interruptor. Pero lo que no puedes hacer por decreto es recuperar la economía. Sacarla del coma inducido es más complicado", ilustra Rafael Doménech, responsable de análisis económico de BBVA Research y uno de los 100 expertos fichados por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para diseñar la ruta de salida de la crisis.

El economista recuerda que solo dos semanas de confinamiento bastaron para provocar una caída de la actividad del 35% y un descenso del PIB del 5,2% en el primer trimestre del año, al que previsiblemente habrá

seguido "una caída del 20%" en el segundo trimestre, y eso teniendo en cuenta que el plan de desescalada ha permitido "iniciar ya la recuperación". En estas últimas semanas, subraya, los datos de pago con tarjeta que maneja su entidad arrojan que la caída del consumo del 70% sufrida durante el estado de alarma se ha rebajado al 5%, si bien asume que parte de esta mejora se puede deber a la demanda embalsada del confinamiento a la que seguirá una mayor contención de gasto.

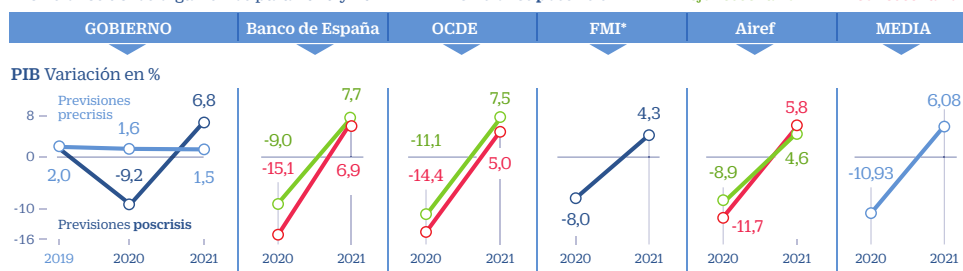
Ahora, el fin del estado de alarma y la reapertura de las fronteras con la UE "se van a notar al permitir la movilidad y facilitar la llegada de turistas. A pocos que vengan va a tener un efecto diferencial, muchos trabajadores saldrán de ERTE y se recuperará la afiliación. La cuestión es hasta qué punto llegará ese rebote de la actividad", plantea María Jesús Fernández, economista sénior de Funcas. Dentro de la incertidumbre imperante, agrega, "lo que tenemos bastante claro es que a lo largo de este año, y previsiblemente del próximo, no se van a recuperar los niveles previos a la crisis".

### Recuperación desigual

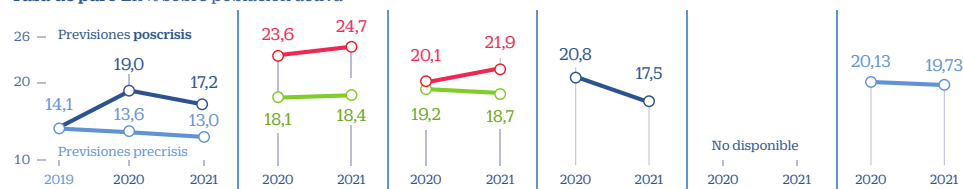
Así, la media de las previsiones del Gobierno, el Banco de España, la OCDE y el FMI apunta a que el PIB retrocederá en torno a un 10% este año para recuperar solo un 6% en 2021; el paro saltará del 13,8% al 20%, y seguirá cerca del 19% en un año; el déficit pasará del 2,8% al 11%, manteniéndose en el 7% al arrancar 2022, y la deuda pública pasará del 95% a estabilizarse en el entorno del 118%. "Lo que veo más peligroso en el largo plazo es el riesgo de una nueva crisis de deuda a partir de 2022", expone Fernández, quien aduce que el mal estado de

## Balance de la situación macroeconómica de España tras el estado de alarma

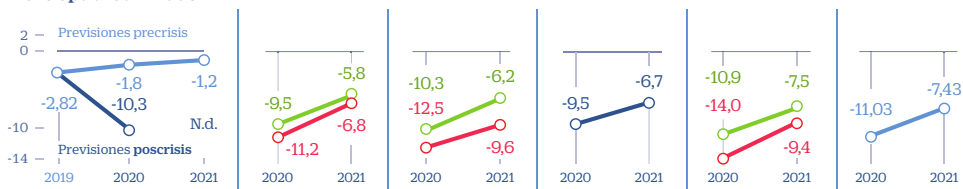
Previsiones de los organismos para 2020 y 2021 Previsiones postcrisis Mejor escenario Peor escenario



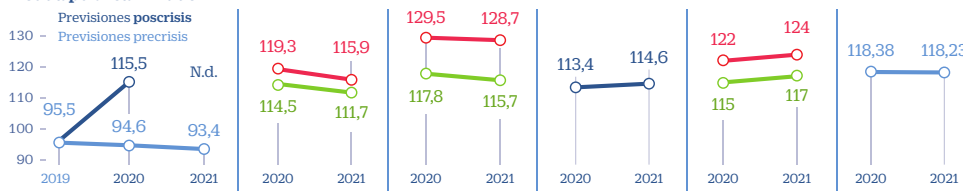
### Tasa de paro En % sobre población activa



### Déficit público En % del PIB



### Deuda pública En % del PIB



Fuentes: Gobierno de España, Banco de España, OCDE, FMI, Airef y elaboración propia. (\*) El FMI aporta un único escenario.

BELÉN TRINCADO / CINCO DÍAS

las cuentas públicas ya nos ha "restado margen de maniobra" para abordar esta emergencia y, de no abordarse la reconducción del déficit estructural, dejará al país indefenso si hay otra crisis.

"La recuperación, al igual que la caída, será desigual", exponen en BBVA Research, donde preocupan

sectores dependientes de cadenas mundiales, como la automoción, o el turismo, que asumen que no se repondrá hasta, al menos, 2022, mientras el gremio hotelero habla ya de 2023.

Del calado de la reactivación, coinciden los expertos, dependerá que los casi cuatro millones de afectados que han esquivado la

destrucción de su empleo gracias a los ERTE acaben reincorporándose a su trabajo o agraven el impacto laboral. Doménech considera que los ERTE han sido ya un éxito al permitir romper con la tradicional regla de un punto menos de empleo por cada punto de PIB, evitando que la caída del 25% de la economía en el primer

semestre se replique en el empleo, que solo cede un 5%.

Finalmente, los economistas señalan que el mayor riesgo para la economía es el de un rebrote del virus tal, que exija volver al confinamiento. Un temor que, en vista de los repuntes en Alemania o China, ni siquiera tiene por qué esperar a materializarse en otoño, alertan.





Impacto del Covid-19

# España, el país que menos ayudas fiscales moviliza para las empresas

El estímulo se queda en el 0,9% del PIB, mientras países del entorno lo sitúan en el 10% de media

Escala puestos si se suma el paquete crediticio, y aún así solo logra superar a Hungría y Grecia

Ignacio Faes MADRID.

El estímulo fiscal de España para ayudar a las empresas por la crisis del coronavirus Covid-19 es el menor de los países de su entorno. Las ayudas, entre aplazamientos y suspensión de impuestos, no llegan al 0,9% del PIB, mientras los países del entorno sitúan su estímulo en torno al 10% de media.

Según los datos del instituto europeo Bruegel, presidido por el expresidente del Banco Central Europeo (BCE) Jean-Claude Trichet, las ayudas fiscales son muy superiores en otros países europeos. Italia ha aprobado una movilización del 13,2%. Por su parte, Portugal ha lanzado un estímulo del 11,1%, Francia del 8,1% y Alemania del 7,3%. Grecia es el país que, tras España, menor estímulo fiscal ha aplicado y -aunque ha sido uno de los lugares menos afectados por el Covid-19 aún así sus medidas fiscales suponen más del doble que las españolas y alcanzan el 2% del PIB griego.

Por otra parte, si se suman las líneas de crédito y los avales aprobados por los Gobiernos para mejorar la liquidez de las empresas, el estímulo total en España se queda en el 10,1% del PIB. Mientras, Italia suma un paquete que alcanza el 43% y Alemania un 34,5%. Solo Grecia y Hungría, países poco afectados por la crisis, quedan por detrás de España si se suman estos dos grandes paquetes -fiscal y de aval crediticio- de ayuda. Sin embargo, estos dos países han lanzado un estímulo fiscal que llega a ser casi ocho veces superior al español en el caso de Hungría, con un 8,3% del PIB.

Los estímulos de Estados Unidos, por su parte, se quedan también por detrás de España, en el 5,2% del PIB -2,6% de ayudas fiscales más otro 2,6% en créditos para las empresas-. Sin embargo, el plan de recuperación americano -que alcanza los 2 billones de dólares, el 10% del PIB de Estados Unidos- ha destinado la mayor parte de los fondos en otras ayudas directas para las familias.

Antonio Camuñas, expresidente de la Cámara de Comercio España-Estados Unidos y socio director de Diplomacia Global de Crowe, subraya que el paquete americano "tiene un comportamiento de fondo completamente distinto a los europeos". Camuñas destaca que "mientras que en Estados Unidos lo que se ha hecho es meter el dinero en el bol-



La ministra de Hacienda, María Jesús Montero. EFE

sillo de los ciudadanos, en Europa si que el grueso de las ayudas está en el estímulo fiscal, con diferimiento en el pago de impuestos".

De este modo, la comparación de Estados Unidos con el resto de países europeos queda desvirtuada por no centrar sus ayudas en el plano

fiscal. Aun así, el plan de estímulo es casi dos veces el español, y llega al 2,6% del PIB.

### El plan español

Los datos recopilados por el Instituto Bruegel muestran que el paquete de estímulo fiscal español, con

diferimiento y suspensión de cuotas en algunos casos, se queda en los 10.700 millones de euros. Así, 3.900 millones de euros se destinan en aplazamientos de impuestos laborales, contribuciones a la seguridad social y otros gastos laborales.

Por otra parte, Moncloa ha destinado otros 1.200 millones de euros en otros aplazamientos de pago, principalmente relacionados con impuestos corporativos e impuestos. Además, ha movilizado 1.000 millones de euros en la suspensión total del IVA en suministros médicos comprados por entidades públicas, instituciones sin fines de lucro y centros médicos.

El Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez ha destinado 58 millones de euros en aplazamiento o flexibilización de gastos de servicios públicos para empresas y trabajadores autónomos.

También, ha aprobado una moratoria de alrededor de 5.000 millones de euros en pagos de préstamos hipotecarios para viviendas primarias para aquellos identificados como económicamente vulnerables, que enfrentan dificultades extraordinarias para obtener el pago como resultado de la pandemia de Covid-

19. No hay una estimación oficial de la cantidad disponible, ni estimaciones de los investigadores. La cantidad de 5.000 millones es una aproximación que surge de multiplicar el volumen en circulación de hipotecas en un 35% -suponiendo que la condición se aplicará el 35% de

**Italia aprueba un plan tributario del 13,2% del PIB, Portugal del 11% y Francia del 8,1%**

### La respuesta fiscal al Coronavirus

PAÍS	GASTO COVID (%)	ESTÍMULO FISCAL (%)	CRÉDITOS Y GARANTÍAS (%)
Bélgica	1,4	4,8	21,9
Dinamarca	2,1	7,2	2,9
Francia	3,6	8,1	13,9
Alemania	13,3	7,3	27,2
Grecia	1,1	2,0	0,5
Hungría	0,4	8,3	0,0
Italia	0,9	13,2	29,8
Holanda	3,7	7,9	3,4
Portugal	2,5	11,1	5,5
España	2,3	0,9	9,2
Reino Unido	4,8	1,9	14,9
Estados Unidos	9,1	2,6	2,6

Fuente: Instituto Bruegel.



El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el vicepresidente, Pablo Iglesias. E. PRESS

# El Gobierno aparca el impuesto a la banca que impulsa Pablo Iglesias

La imposición a la repatriación de dividendos continúa en la hoja de ruta

F. Tadeo / I. Acosta MADRID.

El Gobierno ha aparcado el plan de Pablo Iglesias de implantar un impuesto especial a la banca para hacer frente a su política social y económica. El ala más moderada del Ejecutivo, liderado por la vicepresidenta, Nadia Calviño, está bloqueando la puesta en marcha de esta tasa, con la que Unidos Podemos pretende recuperar buena parte de las ayudas públicas inyectadas al sector financiero en la pasada crisis, por un importe total de 60.000 millones de euros.

Fuentes del Ministerio de Hacienda sostienen que sobre la mesa del proyecto de Presupuestos Generales se incluyen los tributos que forman parte del acuerdo de Gobierno entre el PSOE y la formación morada. En dicho pacto no figura ningún tipo de gravamen especial

para las entidades financieras, consistente, a priori, en la elevación de Sociedades en 10 puntos para incrementar la recaudación.

Ya en 2019, los socialistas pudieron echar por tierra la pretensión de Podemos de sacar adelante este impuesto, que pagarían bancos que fueron solventes y que no percibieron ningún tipo de ayuda directa. Además, sería discriminatorio y, posiblemente, anticonstitucional.

Ahora, dos son los argumentos principales para frenar dicha iniciativa. Una, que no se puede castigar en demasía al sector financiero, porque es clave para la recuperación. Cuánto más dinero se le retire, menos crédito otorgarán, tanto a familias como empresas, para que la reactivación de la economía sea lo más rápida y contundente posible. Y dos, el acercamiento de Sánchez a los partidos de la derecha

## Cajeros y depósitos, en el aire

Otros impuestos que afectarían al sector bancario y que forman parte de las propuestas de Podemos sería el gravamen a los depósitos que captan de la clientela y que en algunas comunidades está siendo efectivo desde hace años, como Cataluña. El propósito es que se imponga un 1%, pero en Hacienda y Economía no se ve con buenos ojos. Tampoco la idea de obligar a las entidades a sufragar la instalación de cajeros en todas las localidades.

(especialmente Ciudadanos) para logra el apoyo definitivo a las Cuentas del Estado, que llevan a bloqueadas varios años y que son necesarias para impulsar todas las medidas sociales surgidas tras la pandemia del coronavirus.

Pese a esta congelación, Podemos ya ha propuesto en la Comisión para la Reconstrucción la necesidad de que la banca pague más a las arcas públicas, a través de un impuesto extraordinario, con el que poder sufragar, entre otras medidas, la renta mínima universal que fue aprobada recientemente.

## Rechazo frontal del sector

Desde el sector, sus máximos responsables confían en que tal gravamen finalmente caiga en saco roto, pero temen que se produzca un giro en los acontecimientos, ya que algunos de los postulados de Iglesias

han tenido aceptación por parte de Sánchez, pese a la oposición (a veces expresada con significativos encontronazos) por parte de diferentes miembros del Ejecutivo.

Hace unos días, tanto Ana Botín (Banco Santander) como Carlos Torres (BBVA) y Jordi Gual (Caixa-Bank) han rechazado cualquier tipo de impuesto al sector discriminatorio, ya que, entre otras cuestiones, provocaría un descenso de sus niveles de competitividad frente a otros sistemas bancarios y perjudicaría el flujo de crédito, que tan necesario es en estos momentos.

**El Ejecutivo sí discriminará al sector financiero con más fiscalidad por Sociedades**

Pese a ello, lo que sí está encima de la mesa del Gobierno es el aumento en la tributación de la banca por encima del resto de empresas. De acuerdo con los planes -incluidos en el acuerdo entre PSOE y Podemos- es la obligatoriedad de que todas las compañías paguen al menos un 15% de sus beneficios, que en la banca sería del 18%.

Con esta medida, las entidades tendría limitada la recuperación de los activos fiscales diferidos, exenciones a las que tienen derecho por ley por las elevadas provisiones y pérdidas llevadas a cabo entre 2009 y 2012 y por el coste de las prejubilaciones.

También, en la hoja de ruta del Ejecutivo, se mantiene la imposición a los dividendos que repatrian las compañías de sus filiales en el extranjero y que afectaría, entre otros, al sector financiero. Esta tasa, que supondría una doble tributación por los mismos ingresos, se llevaría a cabo a través de la limitación de las exenciones totales de las que ahora se benefician las multinacionales españolas por embolsarse la remuneración a los accionistas de sus franquicias en el exterior. La intención sería reducir en un 5% dicha deducción fiscal, según lo acordado a principios de año.

# La tasas Tobin y Google siguen adelante en el Congreso

F. T. / I. A. MADRID.

El Gobierno ha logrado en las últimas semanas sacar adelante en el Congreso su propuesta para lanzar las denominadas tasas Tobin y Google, ambas incluidas en el acuerdo para la coalición de PSOE y Podemos de principios de año. Ahora tendrán que ser sometidas a las enmiendas parciales de los distintos grupos para su aprobación definitiva.

Con la primera, el Ejecutivo pretende lograr hasta más de 800 millones de euros, con un gravamen a las transacciones financieras, es decir, con la compra venta de valores cotizados en empresas que tienen una capitalización bursátil de al menos 1.000 millones.

En la actualidad, dicho importe parece prácticamente imposible de alcanzarse debido a la caída en picado de las cotizaciones como consecuencia de la incertidumbre desa-

tada por la pandemia del coronavirus en marzo.

Este impuesto, novedoso en nuestro país pero establecido ya en otros países europeos, tendrá que ser asumido por las entidades financieras. Sin embargo, desde el sector se advierte de que serán los ciudadanos los que finalmente van a costearlo, ya que la intención es elevar el coste de estas operaciones para aquellos que tengan actividad bursátil.

Hace unos días, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, defendió la tasa Tobin frente a las críticas tanto del PP como de Ciudadanos y Vox. Indicó que únicamente el 13% de particulares tienen acciones en bolsa y una mínima parte de ellos se encuentra en situación de exclusión financiera o pobreza.

En cuanto a la tasa Google, el Gobierno también ha logrado que el Parlamento tramite su aproba-

ción. Está dirigida a las compañías tecnológicas que no pagan impuestos por su actividad en nuestro país. El objetivo del Ejecutivo es recaudar con este gravamen cerca de 1.000 millones de euros.

EEUU, de donde son los principales afectados, ya ha amenazado con la imposición de aranceles a productos españoles. Pese a ello, el Gobierno pretende continuar con su intención de poner en marcha dicho tributo.



# Díaz: "La empresa tendrá que pagar parte de la factura de trabajar en casa"

La ministra Trabajo dice que están ultimando un acuerdo para extender los Erte

eE. MADRID.

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, está preparando una ley para regular el teletrabajo y el trabajo a distancia que obligará a las empresas a pagar parte de los gastos que esto ocasiona al trabajador y que establecerá que será voluntario y respetará el derecho a la desconexión. "Los gastos que ahora estamos asumiendo en el teletrabajo tiene que pagarlos la empresa. Vamos a hacer una lista que sí o sí tiene que acometer el empresario. Es probable que vaya con facturas, para partes proporcionales de suministros" y según lo que se decida en los procesos de negociación colectiva, ha explicado este domingo en una entrevista de *El Periódico de Catalunya*. En el modelo suizo, la empresa paga una parte del alquiler.

"Es un elemento de justicia. Los trabajadores durante la pandemia han teletrabajado pero han sufragado los gastos que no le son propios, el teletrabajo no puede salir gratis a las empresas", añade la ministra en la entrevista.

Díaz recuerda que España "no tiene una ley que regule el trabajo a distancia, que no es lo mismo que el teletrabajo" ya que la reforma laboral del PP "aborda de manera absolutamente deficiente el trabajo a distancia. Y lo aborda como una cosa residual, marginal e incluso infravalorada". "Lo que haremos será desplegar una ley que realmente regule el trabajo a distancia y el teletrabajo", anuncia.

La ministra avanza que la ley recogerá que "el trabajo a distancia se tiene que hacer desde el lugar que escoja el trabajador. Ha de ser voluntario y respetar los derechos laborales, como la desconexión. Hemos de garantizar los derechos de descanso y los derechos de conciliación". La ministra no se compro-



Yolanda Díaz, ministra de Trabajo. POOL MONCLOA

mete a dar plazos para que sea aprobada esta ley porque dependerá de los informes que se despliegan, "pero va adelante".

El Ministerio de Trabajo abrió la

propuesta de la ley a consulta pública el pasado viernes y la plataforma MalasMadres ha presentado una propuesta para que la paridad sea obligatoria en el teletrabajo. Y

es que, la asociación teme que la opción de acogerse al teletrabajo la soliciten mayoritariamente mujeres madres, lo que puede traducirse "en un freno a la carrera profesional", recoge la entidad en un comunicado. El Ministerio de Trabajo también prepara una ley del trabajo en plataformas, para regular trabajos como el de los repartidores en bicicleta y que sean empleado por cuenta ajena. "Está muy bien que existan pero que trabajen en condiciones igualitarias y por descotado respetando los derechos", sentencia.

Sobre la prórroga de los Erte hasta septiembre, la ministra explica que está trabajando "para cerrar un acuerdo lo antes posible".

## Las ferias y congresos volverán este lunes con medidas de higiene

El Gobierno ha anunciado la vuelta a la actividad de ferias y congresos profesionales coincidiendo con el final de la fase 3 de la desescalada, que será a partir del próximo lunes, 22 junio, en la mayoría de comunidades autónomas. Así lo han hecho saber los organizadores de ferias y congresos a través de un comunicado, en el que han aclarado que los eventos presenciales se celebrarán siguiendo los protocolos de seguridad establecidos por el Ministerio de Sanidad, los cuales varían en función de cada comunidad.



LA CRISIS DEL CORONAVIRUS



Los pasajeros de un vuelo de Düsseldorf a Mallorca atienden a los tripulantes de cabina mientras les dan instrucciones antes de despegar. / EFE

# Las aerolíneas se ven abocadas al 'low cost' para sobrevivir a la crisis

La recesión frena la renovación de flotas y propicia tarifas con grandes descuentos

RAMÓN MUÑOZ, Madrid  
Algunos expertos pronosticaron que los efectos de la covid-19 acabarían con los vuelos *low cost*. Pero los últimos datos de la industria apuntan en la dirección contraria. Con la pre-

visión de pérdidas récord de cerca de 80.000 millones de euros en 2020, las grandes aerolíneas han retrasado la renovación de sus flotas y han aplazado pedidos de nuevos aparatos. Las compañías más pequeñas van a usar

aviones antiguos y contaminantes que ahora están en tierra porque el bajo precio del petróleo les compensa. Y todas ellas preparan fuertes descuentos para que los viajeros vuelvan a volar. El *low cost* seguirá en los cielos.

tarifa promedio de un viaje de ida y vuelta (antes de tasas e impuestos) será de 254 dólares en 2020, un 20% menos que en 2019, y apenas subirá a 257 dólares en 2021.

Para empeorar la situación, las cuantiosas ayudas estatales provocarán una distorsión anti-competitiva en el mercado. Hasta mediados de mayo, la IATA estima que las aerolíneas de todo el mundo han recibido 123.000 millones de dólares, incluyendo subsidios salariales para preservar hasta 800.000 empleos.

"El panorama competitivo en Europa se verá distorsionado por la cantidad sin precedentes de ayudas estatales que violan las normas de la UE, y provocarán importantes descuentos y ventas por debajo de coste", ha denunciado Michael O'Leary, consejero delegado de Ryanair.

Air France-KLM se ha beneficiado de un rescate público de unos 10.000 millones de euros, tanto el Gobierno francés como el de Países Bajos. Los accionistas de Lufthansa deben aprobar esta semana ayudas de 9.000 millones del Gobierno alemán, que a cambio podría hacerse con hasta el 25% del capital. Y tras doce años al borde de la quiebra, Alitalia será renacionalizada con una inyección de 3.500 millones. También recibirán ayudas TUI Group (800 millones), Finnair (700 millones) y Norwegian (260 millones), entre otras.

Iberia y Vueling solo han conseguido un préstamo avalado por el ICO de 1.000 millones de euros, pero ninguna ayuda directa. La indefinición sobre la nacionalidad de IAG, el *holding* hispanobritánico al que pertenece la compañía española, hace aún más complicado la recepción de esas subvenciones. Gallego alertaba en el foro de la CEOE de que así será difícil competir.

En suma, el escenario que se abre para los pasajeros será el de vuelos en aviones llenos y antiguos, con menos comodidades a bordo, y siempre con mascarilla. El consuelo es que las tarifas serán muy baratas.

Luis Gallego, presidente de Iberia y próximo presidente de IAG a partir de septiembre, ponía el dedo en la llaga en la reciente cumbre de la CEOE al pedir un plan Renove para la aviación europea: "Necesitamos un plan para ayudar a las aerolíneas a salir de la crisis más profunda de la historia de la aviación, para contribuir a una aviación más sostenible con aviones menos contaminantes, y para apoyar al ecosistema aeronáutico europeo, a fabricantes, aeropuertos, y aerolíneas".

Y es que las estadísticas refutan la utopía que dibujaban los expertos que pronosticaron que la crisis de la covid-19 acabaría con el *low cost* de la aviación al borrar a las compañías más pequeñas y con menos márgenes, en favor de las más grandes, capaces de volar con aviones más eficientes ecológicamente y prestar un mejor servicio al pasajero.

El sector de las aerolíneas perderá 84.300 millones de dólares este año, 3,2 veces más que las pérdidas acumuladas por la crisis global financiera de 2008, y reducirá al 50% los ingresos hasta los 419.000 millones de dólares, según la última actualización de la IATA, la asociación que agrupa a la mayor parte de las compañías de todo el mundo. La recuperación será mucho más lenta de lo inicialmente previsto. Nadie se aventura ya a avalar la previsión inicial de que en 2023 se volvería a la situación de 2019, y aún en 2021 se pronostican pér-

didias de 15.800 millones de dólares, y una deuda añadida de 120.000 millones de dólares.

Ante este panorama desolador, las aerolíneas tienden a reducir flota y aplazar la renovación de los aparatos. Para 2020, las aerolíneas comerciales tienen actualmente programada la entrega de alrededor de 960 nuevos aviones, un 40% menos que el número planeado originalmente a principios de este año.

De hecho, a finales de mayo, solo se habían entregado 235 aviones nuevos, muy por debajo del nivel habitual. Con menos rutas que cubrir y menos pasajeros, las aerolíneas consideran también la rentabilización de sus activos existentes. Con las tarifas por los suelos, las compañías con menos recursos tienen menos incentivos para retirar los aparatos más antiguos, a los que les queda

vida útil, o los alquilarán a otras compañías, mientras que las aerolíneas de bandera los pondrán en el mercado por la reducción de rutas de largo radio. Es el caso de Iberia, que ya ha anunciado que ha pactado con Airbus retrasar la llegada de parte de los 11 nuevos A350 y 18 A320 neo que tiene pendiente de entrega, y acelerará la retirada definitiva de los 16 aparatos A340-600. Los viejos Jumbo B747 y Airbus A380 seguirán surcando los cielos.

El bajo precio del crudo compensa con creces alargar la vida de estos aparatos. Solo en este año la factura de combustible de la industria aeronáutica disminuirá a solo 78.000 millones de dólares frente a los 188.000 millones que se gastaron en 2019, disminución reflejo tanto del menor tráfico como de la fuerte disminución de los precios del petróleo.

Con estas previsiones, se espera que la flota comercial mundial en servicio disminuya a 20.261 aviones a finales este año, frente a los 29.697 aparatos con que contaba a finales de 2019. El tamaño promedio de las aeronaves en la flota también se reducirá a medida que las aerolíneas se centren inicialmente en viajes de corta y media distancia. Por lo tanto, para finales de 2020 se estima que habrá una oferta de alrededor de 2.800 millones de asientos disponibles, un tercio menos que en 2019.

## Rescates poco eficaces

Acuciados por las necesidades financieras y para animar al renuente viajero con miedo al contagio, las aerolíneas están reduciendo significativamente los precios de los billetes con descuentos. La IATA estima que la

## Sí a los test de la covid-19, pero rápidos y baratos

Con la apertura de fronteras ha surgido el debate sobre el uso de los test para detectar la covid-19 en aeropuertos. Las aerolíneas no se niegan a realizar estas pruebas, pero exigen a las autoridades que éstas deben entregar resultados rápidos, ser realizadas masivamente y tener altos niveles de precisión. Además,

las pruebas deben ser rentables y no crear una barrera económica o logística para viajar.

La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) publicó una guía para que los Gobiernos de todo el mundo comiencen a recuperar las conexiones aéreas. En su opinión, la pruebas de la

covid-19 no deberían ser una condición necesaria para reabrir fronteras o reanudar los servicios aéreos.

Por su parte, la IATA considera que el diagnóstico a través de PCR podría ser un punto de protección para los viajeros de países considerados de mayor riesgo, eliminando potencialmente la necesidad de medidas más caras e intrusivas como la cuarentena, "que es una barrera importante para la realización de viajes y la recuperación de la demanda".



SEGURIDAD SOCIAL

# El Pacto de Toledo retoma hoy su trabajo en el Congreso

▶ La vuelta a la normalidad reactiva algunas de las reformas pendientes

▶ La comisión para la reforma de las pensiones se reúne tras el parón del covid

EL PERIÓDICO MADRID

La vuelta a la normalidad desbloquea algunas de las grandes reformas pendientes de la economía española que habían quedado en suspenso por la urgencia de la pandemia, entre ellas, la reforma de las pensiones. La comisión de evaluación y seguimiento de los acuerdos del Pacto de Toledo retoma hoy sus trabajos con una nueva reunión en el Congreso, la primera desde el inicio de la crisis del covid-19 y la declaración del estado de alarma hace 100 días.

Esta comisión, presidida por la exministra socialista Magdalena Valerio, fue una de las últimas que celebró reuniones antes de que la Cámara Baja decidiera suspender su actividad tras el positivo de Javier Ortega

Smith, el primer caso de coronavirus conocido en el Congreso.

Este lunes, los grupos esperan retomar las conversaciones iniciadas al poco de echar a andar la legislatura, cuando todas las formaciones se comprometieron a iniciar los trabajos desde el punto en el que lo dejaron en 2019, cuando no fue posible alcanzar un acuerdo antes de la disolución de las Cortes Generales por la convocatoria anticipada de elecciones. Los trabajos se quedaron sin cerrar a falta de unos pocos flecos, después de que Unidas Podemos, ahora en el Gobierno, planteara la presentación de más votos particulares de los previstos, con el consiguiente desmarque de PP y Ciudadanos del borrador que estaba encima de la mesa.

El Gobierno y los agentes sociales reclamaron cerrar este



▶▶ Concentración de pensionistas en Álava el pasado noviembre.

mismo año un acuerdo con el que empezar a adoptar medidas en materia de pensiones. Esta misma semana, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, pidió un acuerdo para poder revalorizar las pensiones en un nuevo marco legal, y recordó cómo al poco de llegar al cargo, en febrero, percibió en conversaciones con los grupos la posibilidad de alcanzar acuerdos para «mo-

dificar realmente rápido la ley general de Seguridad Social».

Además de retomar el diálogo político y establecer un método de trabajo con la vuelta de la actividad parlamentaria, los grupos también tendrán que poner fecha a la comparecencia del secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, Israel Arroyo, que aún no ha comparecido ante la comisión. ≡



Pr: Diaria  
Tirada: 28.818  
Dif: 19.343

# Díaz confirma que la empresa asumirá gastos del teletrabajo

Expansión. Madrid

La ministra de Trabajo, la *morada* Yolanda Díaz, cuya relación con los representantes empresariales no es precisamente un idilio, le envió ayer un nuevo recado. Confirmó que, en la nueva regulación del teletrabajo que prepara su departamento, las compañías tendrán que compensar parte de los gastos en los que incurren sus trabajadores por el teletrabajo, tal como publicó EXPANSIÓN el pasado 9 de junio. “Los trabajadores durante la pandemia han teletrabajado, pero han sufragado los gastos que no le son propios; el teletrabajo no puede salir gratis a las empresas”, afirmó ayer la titular de Trabajo en un entrevista en *El Periódico* en la que enfatizó que el trabajo a distancia “no es lo mismo que el teletrabajo”.

El ministerio confeccionará un listado de gastos que deberán asumir los empresarios, con la aplicación de porcentajes proporcionales. En concreto, el ministerio que dirige Díaz tendrá en cuenta en la futura norma aspectos como los costes por el uso de papel o material de impresora; también se contemplará el equipo informático necesario para trabajar o incluso la electricidad usada en el desarrollo del cometido laboral. Este tipo de costes forma parte de la desgravación fiscal que ya tienen los autónomos en su declaración. “Es el traslado a la persona trabajadora de costes de la actividad productiva, sin compensación alguna para ella”, mientras que para la compañía representa “una reducción de costes en las oficinas y ahorro en los costes de desplazamientos de los trabajadores”, señalaba Trabajo en su explicación sobre el propósito del ministerio de elaborar un proyecto de ley sobre el teletrabajo.

Yolanda Díaz avanzó ayer algunos aspectos que regulará la futura normativa, como por ejemplo que el trabajo a distancia deberá realizarse desde el lugar que elija el propio empleado. La ministra subrayó que esa modalidad laboral deberá ser voluntaria y respetar derechos laborales como la desconexión en aras de garantizar “los derechos de descanso y los derechos de conciliación”.

De momento, la aprobación de la ley y su entrada en vigor son una incógnita. Díaz se limitó a asegurar ayer que



Europa Press

Yolanda Díaz, ministra de Trabajo.

**La ley fijará que sea el trabajador el que decida desde dónde quiere trabajar a distancia**

el proyecto “va adelante” y que sus plazos dependerán de los preceptivos informes.

El departamento que dirige Díaz prepara también una ley del trabajo en plataformas para regular empleos como el de los repartidores en bicicleta, con el objetivo de que trabajen en condiciones igualitarias, por lo que la ley les equipará a ser asalariados con los mismos derechos que el personal de plantilla. En otras palabras, Yolanda Díaz pretende que quienes en la actualidad sea “falsos autónomos” se conviertan en asalariados.

En relación a los trabajadores afectados por ERTE que aún no han cobrado la prestación, la ministra de Podemos minimizó su impacto, al cifrar en alrededor del 1% la incidencia de errores, “ajenos al SEPE”, mientras que sobre las negociaciones para extender los expedientes temporales más allá del 30 de junio, confió en cerrar un acuerdo lo antes posible. De hecho, Gobierno y agentes sociales se reúnen hoy para intentar sellar un acuerdo y prorrogar los ERTE hasta el 30 de septiembre. El principal punto de fricción es que sindicatos y empresarios quieren que no se exima de cuotas a las empresas por recuperar trabajadores del ERTE, sino que esos recursos se destinen precisamente a ayudar a las empresas que aún se encuentran inmersas en expedientes por causas objetivas.



Emergencia económica provocada por la pandemia

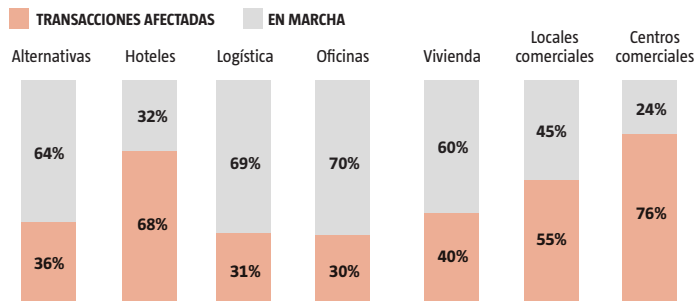
# Los inversores inmobiliarios dejan un tercio de las compras por la Covid-19

Un 70% de las operaciones se ha suspendido, en un 51% de los casos sin fecha

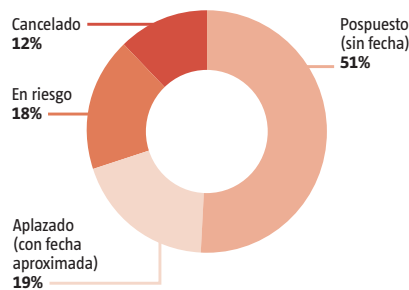
EL IMPACTO DE LA COVID-19 EN EL MERCADO INMOBILIARIO EN ESPAÑA

## La inversión, paralizada

TRANSACCIONES POR SECTORES

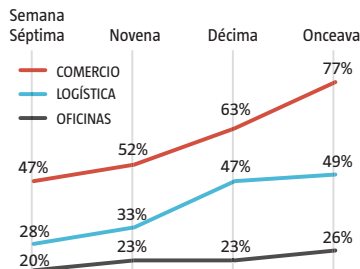


ESTADO DE LAS TRANSACCIONES AFECTADAS

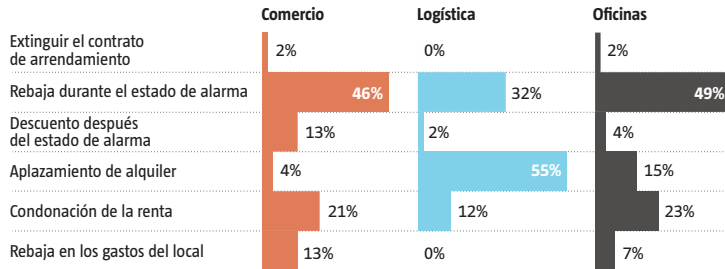


## Renegociaciones masivas de los inquilinos

EVOLUCIÓN DE LAS RENEGOCIACIONES



TIPOS DE RENEGOCIACIONES



FUENTE: CBRE

LA VANGUARDIA

ROSA SALVADOR  
Barcelona

La inversión inmobiliaria empezó el 2020 en niveles récord, con operaciones por valor de 3.225 millones de euros en el primer trimestre, el segundo valor más alto de los últimos 14 años, pese a que el 14 de marzo se declaró el estado de alarma para frenar la expansión de la Covid-19. Desde entonces, sin embargo, el confinamiento ha hundido las compraventas inmobiliarias en España, según los datos de la consultora CBRE.

Anna Esteban, directora de la oficina de Barcelona de la firma, explicó en un encuentro organizado por el Club Inmobiliario Esade Alumni, que un tercio de los proyectos de inversión que estaban en marcha antes de la pandemia se han abandonado: un 12% se ha cancelado oficialmente, y otro 18% se considera "en riesgo", porque no han proseguido las negociaciones. Un 70% de los proyectos simplemente se ha retrasado, aunque un 51% sin fecha. El retraso sin fecha, señala Esteban, se debe a que en algunas operaciones faltan informes que requieren visi-

tar físicamente los inmuebles, como las inspecciones técnicas o *due diligences*, o incluso la visita de representantes de los compradores, que si son extranjeros todavía no pueden viajar. "No se ha podido ni siquiera ir al notario", recuerda Esteban.

El descalabro varía enormemente por sectores, y mientras solo un tercio de las compraventas en marcha en oficinas y logística se han visto afectadas, el porcentaje llega 68% en las compraventas de hoteles y al 76% en centros comerciales. "Este impacto asimétrico responde a la situación de los ocupantes: la mayoría de los hoteles aún están cerrados y no sabemos cómo irá la reapertura. Y en la situación de los centros comerciales influye tanto la caída de ventas por el confinamiento como una duda estructural sobre cual será en el futuro el papel del comercio físico respecto a internet".

A corto plazo, reconoce Esteban que los precios de las primeras transacciones que se cierran estos meses no se verán afectados: en las ventas en que se llegó a un preacuerdo antes de la pandemia y se firman arras, el comprador está

obligado a mantener el precio y las condiciones.

El golpe para la inversión inmobiliaria irá más allá de las operaciones canceladas por la pandemia: estos meses no se han abierto nuevas operaciones, con lo que se cerrarán menos ventas en el último trimestre

del año. Así, mientras el año pasado la inversión inmobiliaria alcanzó los 12.000 millones de euros en España, este año se prevé que sean apenas 9.000 millones, un 30% menos, señala Esteban.

No solo no se generan nuevas operaciones, sino que la incerti-

dumbre ha creado una brecha entre las pretensiones de compradores y vendedores.

Más allá de las dudas sobre la evolución de la economía, la principal de los inversores es sobre el rendimiento real de los activos. Así, CBRE estima que en España más de la mitad de los inquilinos de inmuebles comerciales han renegociado sus alquileres. La situación es generalizada en el comercio, donde hasta un 77% de los inquilinos ha renegociado rentas. Estas negociaciones han llevado, en un 47% de los

## 9.000 MILLONES DE INVERSIÓN

Según CBRE, la inversión será este año un 30% inferior a la del año pasado

## EN LOS CENTROS COMERCIALES

El 77% de los inquilinos ha renegociado rentas, por solo el 26% de los de oficinas

## BUSCADORES DE GANGAS

Hay demanda para los mejores edificios... y para comprar gangas de vendedores en apuros

casos, a descuentos durante el estado de alarma; un 21%, a la condonación total durante algún periodo; un 13%, a descuentos una vez reabran los comercios, y otro 13% a reducción de algunos gastos del local que habían asumido como inquilinos.

La situación es completamente

# La vivienda es el activo preferido pese a que hay más inquilinos morosos

ROSA SALVADOR Barcelona

La compra de viviendas para alquilar es el activo preferido por los inversores, por delante de las naves logísticas o de otros inmuebles como geriátricos o residencias de estudiantes. Anna Esteban, directora de la oficina de Barcelona de CBRE, reconoce que a corto plazo las viviendas pueden

estar sufriendo un repunte de la morosidad, o renegociaciones de renta, "pero a largo plazo la crisis aumentará el peso del alquiler como opción residencial". Según la consultora, entre el 2005 y el 2018 aumentaron un 43% los hogares en alquiler, y subirán otro 14% adicional hasta el 2024.

Asval, la asociación de propietarios de viviendas en alquiler, es-

tima que la pandemia ha disparado la morosidad de los inquilinos. Beatriz Toribio, su directora general, señala que las estimaciones de los grandes propietarios (fondos y socimis) que forman parte de la asociación la sitúan en el 15%.

En Barcelona, sin embargo, es muy inferior, según los expertos del sector. Guifré Homedes, director general de Amat Inmobiliaria, señala que en la cartera de inmuebles que administran es del 3,5%, un porcentaje que se ha triplicado desde el año pasado, cuando era solo el 1%. En el mismo sentido Joan Ollé, presidente de la Associació d'Agents Immobiliaris de Catalunya y dueño de la inmobiliaria Ollé Bertrán, la cifra



MANÉ ESPINOSA

### El parón del mercado inmobiliario se notará especialmente en las compraventas de centros comerciales como este de Barcelona

diferente en el mercado de oficinas, donde apenas el 26% de los inquilinos ha pedido descuentos o aplazamientos de pagos. En estas renegociaciones han abundado los descuentos durante el estado de alarma (50%) y en menor medida la condonación de alguna mensualidad

(23%). En una posición intermedia se ha situado el sector logístico (49% de los inquilinos ha renegociado). Sin embargo, a pesar de que algunos operadores han parado porque algunos sectores económicos han cerrado, en este sector han predominado los aplazamientos de

rentas (55%) y en menor medida los descuentos, limitados solo al estado de alarma (32%).

Esta disrupción del mercado presionará los precios a la baja, pero Esteban reconoce que es difícil saber ahora cual es el precio real de un inmueble "porque no hay compara-

bles. Hemos de esperar unos meses a que haya transacciones".

La crisis ha modificado también lo que buscan los compradores. Algunos han aumentado su exigencia de seguridad, de activos bien ubicados y con gran estabilidad en sus flujos de caja, mientras que han

vuelto los inversores oportunistas, que buscan gangas, como comprar a mitad de precios hoteles con pérdidas a operadores con problemas de liquidez. "El producto medio, no muy bien situado o que no esté a pleno rendimiento, se ha quedado sin mercado", reconoce. ●

también en torno al 3% o 4%, aún muy baja pese a la crisis. "De hecho, sigue habiendo seguros de impago del alquiler con primas del 3% o 4% de la renta, que en un escenario de alta morosidad serían impensables".

Homedes reconoce que la morosidad se mantiene baja "con mucha gestión": la inmobiliaria ha llegado a acuerdos personales con un 9% de los inquilinos de las fincas que administra, que incluyen en general pagar solo el 50% de la renta durante tres meses, y prorratear ese dinero en los recibos del año 2021. "Es cierto que según como evolucione la economía ese 9% subirá; y que muchas de estas familias quizás vean empeorar su situación y no puedan



Hay más inquilinos morosos (un 3,5%) y cerca de un 10% ha renegociado la renta con el propietario

pagar la renta", reconoce. De hecho, explica, muchos inquilinos están optando por dejar los pisos anticipando que no podrán pagarlos. "Vuelven a reagruparse, con los padres o con amigos", señala.

La situación es diferente para los grandes tenedores de vivienda: en marzo, un decreto del Gobierno les obligó a conceder una moratoria de cuatro meses del pago del alquiler durante la duración del estado de alarma, a devolver en tres años; o rebajar el 50% del alquiler al inquilino durante cuatro meses. Así, muchos inquilinos han aprovechado esta oportunidad y han retrasado unos meses la toma de una decisión sobre continuar o dejar la vivienda. ●